

Política institucional integral de igualdad en la discapacidad

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial-UTE

Ámbitos:

Institucionalización

Formación

Vinculación orgánica con la comunidad

Tipo: Política institucional

Eje: Discapacidad

Estándares:

2. Adopta medidas de acción afirmativa, cuotas de ingreso y otros mecanismos y procedimientos para promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y movilidad de estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades pertenecientes a grupos sociales en situación de desventaja comparativa, en el contexto de la educación superior.

Lineamientos:

22. Promueve la inclusión de las personas con discapacidad, asumiendo los principios de accesibilidad real con adaptaciones físicas al entorno, la adopción de nuevas tecnologías especializadas, el apoyo humano (intérpretes y facilitadores), y adaptaciones curriculares y metodológicas.

23. Identifica y ejecuta estrategias para disminuir la deserción causada por razones de discapacidad, incluyendo el seguimiento y apoyo que garanticen la permanencia y la profesionalización de las personas con discapacidad.

Informante clave: Lourdes Armendáriz, Directora General del Estudiante
(larmenda@ute.edu.ec)

I. Descripción de la situación inicial

La política institucional integral de igualdad para la discapacidad de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) responde a la demanda planteada por algunas organizaciones, entre ellas la Sociedad de Sordos y la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), con base al acceso efectivo de personas con discapacidad a estudios de nivel superior.

Además, en el año de 1999, una estudiante no vidente con alto grado académico planteó la necesidad de ampliar la oferta de educación superior para personas con discapacidad al entonces Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), en el marco del Primer Encuentro de Graduados con Discapacidades, a partir del cual se trabajaron los lineamientos para facilitar el acceso de personas con discapacidades a las universidades.

Con estos antecedentes, en el año 2000, la UTE inició la implementación de políticas de acceso para personas no videntes y en se implementó un programa piloto que acogiera a estudiantes con discapacidades auditivas, en coordinación con la FENCE.

La política institucional integral de igualdad para la discapacidad responde a la necesidad de garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidades, que en la sociedad ecuatoriana no son necesariamente considerados.

Inicialmente la implementación y aceptación de la política se enfrentó, por parte de la sociedad y específicamente de la comunidad universitaria, al desconocimiento de las discapacidades como una realidad ante la cual el sistema de educación superior debe responder. Tales fueron los casos, que existía duda de las autoridades y docentes sobre los resultados de aprendizaje en estudiantes con discapacidades; así como los efectos de desigualdad que se podrían generar entre estudiantes regulares y con discapacidades, tras la implementación de las políticas de igualdad en la inclusión.

En este sentido, los procesos de sensibilización y difusión sobre la temática han permitido que la comunidad universitaria se acerque al tema, e incorpore dentro de la vida universitaria prácticas inclusivas para las personas con discapacidad.

Se identifica entonces, que tanto personas con y sin discapacidades reproducen un entorno negativo para la implementación de prácticas inclusivas; en el caso de personas sin discapacidades, por el desconocimiento de la problemática y su tratamiento y en el caso de personas con discapacidades, al no reconocerse como sujetos de derechos y deberes.

II. Descripción del proceso de implementación

El objetivo general de la política institucional integral para la igualdad de la discapacidad es priorizar los legítimos derechos que tienen las personas con discapacidades y su objetivo específico es asegurar una participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad a través de su profesionalización.

Los resultados esperados de su implementación son: la profesionalización de personas con discapacidad y que las organizaciones de personas con discapacidades cuenten con líderes que orienten la aplicación de políticas para atender sus “verdaderas necesidades” y lograr la inclusión.

En concreto, se espera que aquellos profesionales que salen de la universidad, y que tienen alguna discapacidad, incidan e influyan en el diseño e implementación de la política pública y la regulación a favor de personas con discapacidades.

La política de igualdad ante las discapacidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial se implementó inicialmente en el campus de la ciudad de Quito. Sin embargo, en la actualidad se implementa a nivel nacional en sus 14 extensiones y 3 sedes.

La política está dirigida a i) personas con discapacidad sensorial (visual y auditiva en todos los niveles), ii) personas con discapacidad física y iii) personas con discapacidad intelectual moderada.

Las actividades que se desarrollan para implementar la política y cubrir a esta población se basan en procesos de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la temática, de tal manera que la comunidad se involucre activamente en procesos de inclusión de las personas con discapacidades al entorno universitario. En esa medida, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios pueden garantizar la adaptación de personas con discapacidad a la dinámica universitaria en la cotidianidad.

Por otro lado, la adaptación de programas curriculares se realiza con la finalidad de que estos permitan la efectiva inclusión académica de estudiantes con discapacidades a las distintas carreras que la universidad oferta. Para ello, actualmente se cuenta con una guía de adaptaciones curriculares según la discapacidad, en la que no sólo participan los especialistas y docentes, sino también lo hacen los y las estudiantes que tienen alguna discapacidad.

Finalmente, como parte de la política se realizan tutorías específicas para las y los estudiantes con alguna discapacidad, con la finalidad de garantizar los resultados de aprendizaje y su inserción en la vida universitaria.

En ese sentido, es importante mencionar que tanto la construcción de la política como su implementación se hicieron a través de mecanismos participativos; es decir, a través del diálogo entre autoridades, docentes y estudiantes, sobre todo para los procesos de adaptación curricular.

El diseño y actualización de la política desde sus inicios estuvo y está a cargo de la Dirección General del Estudiante (Bienestar Estudiantil). Sin embargo, las autoridades apoyaron desde el inicio la construcción de estas políticas y promovieron el compromiso y la participación de docentes, administrativos y estudiantes.

Por su parte, se debe destacar la positiva acogida y apertura de docentes hacia los estudiantes con discapacidades, en el marco de la aplicación de adaptaciones curriculares; así como de funcionarios administrativos que adaptaron procesos de gestión para estudiantes con discapacidades y de estudiantes que apoyaron a sus compañeros que presentaban alguna discapacidad. De esta forma, se vio un involucramiento de toda la comunidad universitaria, pese a que inicialmente hubo cierta resistencia, la misma que progresivamente tras procesos de sensibilización se fue reduciendo.

Influyeron e influyen positivamente en el diseño e implementación de la política, actores institucionales tales como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), FENCE y la Asociación de Sordos. Estas instituciones han participado en proyectos específicos tales como el *Diccionario de Lenguaje de Señas para la Educación Superior* o la dotación de recursos de lectoescritura accesible para niños y niñas no videntes. Desde este punto de vista, los y las estudiantes con discapacidades son los nexos de la Universidad con las organizaciones con las que trabajan.

Los recursos empleados para llevar a cabo las actividades que forman parte de la política son principalmente aquellos relacionados con talento humano, entre los que se encuentran los especialistas de la Universidad. Sin embargo, han sido de apoyo los documentos legales y técnicos difundidos en este ámbito para efectos de sensibilización a la comunidad. Así mismo, el compromiso de las autoridades para garantizar el financiamiento de las actividades, sobre todo de adecuaciones físicas, lo que ha sido muy importante.

Entre los factores que han facilitado el diseño e implementación de la política se cuentan: la apertura de las autoridades; la conformación de un equipo de profesionales que permitió sistematizar todas las experiencias para organizar una guía de trabajo con todos los y las docentes; el aporte a las actividades planteadas por la política por parte de aquellos y aquellas estudiantes con discapacidad; el compromiso de la comunidad con trabajo dentro y fuera de clase (docentes, estudiantes, guardias); y principalmente, la

participación activa de las y los docentes, quienes fueron los más prestos a apoyar procesos de relacionamiento con personas con discapacidades.

Los factores que han dificultado la implementación de la política integral para la igualdad en la discapacidad han sido: la falta de capacitación al docente sobre la problemática; la limitación de recursos para la adaptación tanto curricular; pero sobre todo las limitaciones físicas del entorno universitario para personas con discapacidades; y finalmente, pero no menos importante, la cultura de discriminación que aún es persistente.

Siendo así, los retos a los que se enfrenta la universidad en materia de discapacidades se abordan a través de procesos participativos de involucramiento de toda la comunidad universitaria para la identificación de soluciones y alternativas ante problemas concretos. En este sentido, algunos procesos de adaptación tanto curricular como física se han realizado incluso con la participación de las familias de los y las alumnas que presentan alguna discapacidad.

De este modo, casos como el acceso a procesos de enseñanza de la lengua inglés han sido cubiertos a través de un esquema de cogestión con los padres de familia para la contratación de traductores e intérpretes.

III. Descripción de resultados

Los resultados obtenidos tras la implementación de la política de inclusión e igualdad ante las discapacidades se manifiestan actualmente a través de la presencia de 58 estudiantes con discapacidad en varias carreras que oferta la universidad y 3 estudiantes que han obtenido su título profesional.

En este sentido, el reto es garantizar efectivamente la inserción social y sobre todo laboral de los y las estudiantes con alguna discapacidad que se graduaron en esta universidad, ante lo cual se cuenta con un programa de seguimiento¹.

Así mismo, se puede asegurar que se ha transitado de una integración a una inclusión efectiva de personas con discapacidad a la comunidad universitaria. Esto se deba a que el programa de admisión, los proyectos curriculares y los criterios y prácticas de evaluación son exactamente iguales para estudiantes regulares y estudiantes con alguna discapacidad, variando exclusivamente la adaptación realizada para garantizar el acceso de estos estudiantes a los contenidos curriculares y sus respectivas evaluaciones.

¹ Uno de los casos emblemáticos ha sido el involucramiento de graduados en el Programa Manuela Espejo, auspiciado por la Vicepresidencia de la República a inicios de la década de 2010.

De igual manera, se cuenta entre los resultados obtenidos, la oferta de una Maestría en Educación Especial y el desarrollo de Tutorías Especializadas que garanticen la inserción profesional de los y las graduadas que poseen alguna discapacidad.

A pesar de que no se ha realizado una evaluación del impacto de la política sobre la comunidad universitaria y de que esta se encuentra en construcción, se puede considerar que actualmente la inclusión a las personas con discapacidad en la Universidad ha pasado de ser una acción basada en la buena voluntad a una acción institucionalizada e interiorizada por la comunidad universitaria.

La política se considera innovadora en la medida en que se basa en la inclusión y no sólo en la integración. Es decir, no sólo se adapta y aísla a las personas con discapacidades en un entorno diseñado para ellas, sino que se permite que convivan y se adapten a las limitaciones que el mundo les presenta.

IV. Replicabilidad y lecciones aprendidas

Entre las condiciones identificadas para que esta buena práctica pueda ser replicada en otras Instituciones de Educación Superior, se encuentran la sensibilización de la comunidad universitaria y el financiamiento específico de su implementación, el mismo que requiere del compromiso de las autoridades universitarias para cumplir con los objetivos que se planteen.

Por otro lado, y no menos importante es el apoyo de distintas universidades, de organismos estatales y organizaciones vinculadas al tema, para el diseño e implementación de políticas universitarias que superen la discriminación a personas con discapacidad.

En este sentido, se identifica que la generación de normativa y específicamente de criterios para la acreditación y aseguramiento de la calidad incentivan a las Instituciones de Educación Superior a cumplir con la Constitución y los derechos en ella establecidos con relación a personas con discapacidad.

Para la réplica de este tipo de políticas en otras instituciones de educación superior, se debe tener en cuenta: la implementación de procesos de sensibilización a la comunidad universitaria; el diseño de políticas institucionales de manera participativa; la adaptación de programas curriculares y la implementación de sistemas de tutorías como efecto de un trabajo permanente con los y las docentes; y la transparencia y claridad por parte de las autoridades con relación a este tipo de políticas, esto implica además, ser realistas en cuanto a la sostenibilidad y factibilidad de implementar la política.

Por otro lado, la vinculación con organizaciones y otras universidades también aporta a la generación de iniciativas innovadoras con relación a las políticas de atención a personas con discapacidad.

V. Sostenibilidad

La sostenibilidad de este tipo de políticas depende del uso adecuado de los recursos institucionales y el aprovechamiento de capacidades existentes; es decir, no depender exclusivamente de recursos financieros sino aprovechar también el talento humano. Por ejemplo, docentes que tienen algún tipo de discapacidad pueden facilitar los procesos de diseño de políticas de igualdad ante la discapacidad y las adaptaciones curriculares, lo mismo ocurre con los beneficiarios de las políticas quienes pueden participar y ser vínculos o interlocutores efectivos con las organizaciones que representan a personas con discapacidades.

En este sentido, se identifica que la política es sostenible en la medida en que está internalizada a nivel de la comunidad universitaria. Para ello, la UTE ha materializado la política en documentos tales como el instructivo sobre políticas de acción afirmativa, la guía para docentes sobre adaptación curricular y el reglamento de becas.

Los retos a futuro relacionados con esta buena práctica son: i) el diseño de más accesos físicos que permitan a los estudiantes alcanzar los resultados de aprendizaje, ii) garantizar la inserción laboral de los graduados que tienen alguna discapacidad, iii) reconocer los alcances nacionales que se puedan dar en materia de igualdad y equidad para personas con alguna discapacidad, iv) el intercambio de experiencias nacionales, v) la aplicación de la normativa nacional de educación superior en el marco de la acreditación de la calidad que genera incentivos para el cumplimiento de derechos constitucionales y vi) la vinculación con la comunidad y la coordinación nacional e internacional para la inclusión de personas con discapacidades al sistema de educación superior.

Fuentes adicionales:

Guía de adaptaciones curriculares como plan de acción tutorial para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Instructivo para la aplicación de las políticas de acción afirmativa para la Universidad Tecnológica Equinoccial.